

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL

Manizales, diez (10) de mayo de dos mil veinte (2020)

SENTENCIA DE TUTELA 74

RADICADO 2021-00250

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el juzgado a decidir la acción de tutela interpuesta por **WILMER ARIZA CRISTANCHO** en contra de **JURIDICOS EL SOLAR S.A.S**, por la presunta vulneración a sus derechos fundamentales de petición, defensa y debido proceso. Tramite constitucional al que fue vinculado el **BANCO DE BOGOTÁ, BAYPORT, COOPMINDER, POLICÍA NACIONAL** y al **JUZGADO SESENTA CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ**.

II. ANTECEDENTES

Señala el memorialista que en el mes de mayo de 2020, solicitó un crédito ante el Banco de Bogotá con el fin de comprar la cartera que tenía en las sociedades BAYPORT y COOPMINDER, para dar un alivio financiero a su nomina, no obstante, el funcionario que lo atendió le indicó que se encontraba reportado por mora en las centrales de riesgo por la empresa COOPMINDER.

Por tal motivo, se comunicó telefónicamente con aquella empresa, en donde le indican que la cartera fue entrega a la firma Jurídicos EL SOLAR S.A.S, por mora en el pago de las cuotas, no obstante, nunca fue notificado de la mora en que incurrió, vulnerando con ello sus derechos a defenderse y a conciliar los pagos debido a la pandemia antes de ser reportado en las centrales de riesgo, causándose daño a su buen nombre.

En el mes de marzo de 2020, a pesar que la entidad COOPMINDER entregó la cartera a Jurídicos EL SOLAR S.A.S, inició nuevamente sus descuentos de nomina, generándose un doble castigo a la deuda.

Indica textualmente:

*“ En la actualidad cursa un embargo por valor total de (\$9.335.406), descontados por nomina hasta el mes de agosto de 2021, desconociendo que se me esta cobrando, puesto que para el mes de julio de 2020, se me certifico la deuda por valor de (\$3.840.000) (anexo) y sumado a esto, ya he realizado un aporte por descuento en la vigencia 2020 por valor de (\$1.520.000) (anexos), y el crédito solicitado inicial fue de (\$2.000.000), observando con esto la violación total al debido proceso y al derecho a defenderme, afectando mis ingresos con los cuales no solo sustento mi núcleo familiar (esposa e hijos), sino también apoyo económicamente a mis padres quienes son adultos mayores, no tienen pensión y llevan un tratamiento por enfermedad permanente, sin tener la oportunidad de llegar a una conciliación o acuerdo de pago por cuotas, alineado a los decretos presidenciales por la Pandemia (Covid-19), notándose la mala intención de realizar el embargo obteniendo beneficios financieros a costa del proceso.*

*Es de anotar que el crédito aprobado, iba hacer descontado por nomina ya que es tipo **LIBRANZA**, y una vez se desembolsó los (2.000.000), demostré de acuerdo a mis desprendibles de pago, mi capacidad de endeudamiento para el descuento, sino no era así, entonces hubo una manipulación de mi información financiera por parte del funcionario asesor de COOPMINDER, quien me manifestó que en un lapso de uno a*

dos meses, ingresaba a mi nómina el descuento por valor de **(190.000)**, si no tenía capacidad para el descuento, porque se me permitió y aprobó el crédito, y esta negligencia y desinformación financiera, termino en la actualidad en descuento de embargo a partir del mes de marzo de 2021, y en caso que las entidades en mención se escuden o con el pretexto, que fue un error de digitación al momento de notificarme, hago responsable de esto al funcionario encargado de hacerlo por parte COOPMINDER y la firma JURIDICOS EL SOLAR S.A.S, puesto que esta acción me ha perjudicado económicamente y me llevo al embargo por proceso ejecutivo, que adelanto el juzgado 60 civil de Bogotá.”

Por lo anterior considera vulnerados sus derechos de defensa y debido proceso, pues no se le notificó a tiempo, aunado a que interpuso derecho de petición ante Jurídicos el SOLAR S.A.S para consolidar la información, sin obtener respuesta alguna desde el pasado 31 de enero de 2021.

### III. PRUEBAS

Aportadas por la parte accionante

1. Derecho de petición de fecha 31/01/2021
2. Desprendibles de marzo a diciembre 2020 descuento de nomina
3. Desprendible de marzo y abril 2021 descuento por embargo
4. Certificación deuda a la fecha julio 2020.

### IV. PRETENSIONES

Se pretende con esta acción, tutelar los derechos fundamentales invocados y:

“ (...) **SEGUNDO:** Ordenar a la firma JURIDICOS EL SOLAR S.A.S, a realizar los ajustes de acuerdo a los descuentos por nómina realizados entre los meses de marzo a diciembre de 2020 **(1.520.000)**, sumar los descuentos entre los meses de marzo a mayo de 2021 **(4.667.703)**; y me sea suspendido dicho descuento de mi nómina, teniendo en cuenta el principio **(non bis in ídem)**, de la prohibición que un mismo hecho resulte sancionado de una vez, como se evidencia en este caso que me descuentan y aun así me castigan la cartera (embargo), para que sea descontado lo justo dando garantías al debido proceso.

**TERCERO:** Una vez realizado los ajustes por parte de la firma JURIDICOS EL SOLAR S.A.S, ordenar la notificación al juzgado 60 civil de Bogotá y oficina de pagaduría de la Policía Nacional, para suspender el descuento a partir del mes de **JUNIO** del presente año.

**CUARTO:** Si existió un error de digitación al momento de notificarme por mora en el pago de la cuota, hacer responsable al funcionario encargado de hacerlo por parte, ya sea de COOPMINDER y/o la firma JURIDICOS EL SOLAR S.A.S, por daños y perjuicios económicos, ya que ninguna de las dos entidades puede o podrá demostrar que me informaron de dicha mora dentro del tiempo establecido ya sea en el primer o segundo mes de las cuotas en mora para la vigencia 2019.

**QUINTO:** Ordenar la entrega de copias o fotocopias de los documentos solicitados a COOPMINDER y/o la firma JURIDICOS EL SOLAR S.A.S, tales como: a. formato solicitud de crédito, b. Formato o constancias de las notificaciones ya sea por correo, mensaje, soporte y/o registro telefónico remitidas a mi nombre, c. Copia del acta de conciliación o acuerdo de pago de la deuda en mora firmada por las partes, d. Certificación de la firma JURIDICOS EL SOLAR S.A.S, de manera discriminada que se me está cobrando, el concepto, motivación y los valores. Remitidos a la dirección o correo personal de notificación, como aparece en el presente documento.”

### V. TRAMITE

Mediante auto fechado 27 de abril de la presente anualidad, se admitió la acción de tutela, se decretaron las pruebas presentadas por la parte demandante y se dispuso la notificación a la entidad accionada, para que se sirvieran dar respuesta al escrito de tutela dentro del término de (2) días hábiles contados a partir de la notificación del auto admisorio, solicitando las pruebas que pretenda hacer valen para su defensa.

Así mismo, se ordenó la vinculación del **BANCO DE BOGOTÁ, BAYPORT, COOPMINDER, POLICÍA NACIONAL Y JUZGADO SESENTA CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ.**

Se decretó como pruebas de oficio **REQUERIR** al señor **WILMER ARIZA CRISTANCHO**, para que en el término de dos (2) días allegue al Despacho constancia de envío y entrega del derecho de petición dirigido a JURÍDICOS EL SOLAR S.A.S el pasado 12 de marzo de 2021.

## **VI. PRONUNCIAMIENTO DE LAS PARTES**

El accionante aportó la constancia de envío y entrega del derecho de petición dirigido a Jurídicos EL SOLAR S.A.S el pasado 12 de marzo de 2021.

La **POLICÍA NACIONAL** indicó que en lo que concierne a la Dirección de Talento Humano de su institución, se evidencia un descuento por concepto de embargo decretado sobre el salario del accionante por parte del Juzgado Sesenta Civil Municipal de Bogotá, a partir del 13 de febrero de 2021, por lo tanto, no se encuentran vulnerando ningún derecho, ya que las deducciones efectuadas son por una orden judicial, dando cumplimiento a sus deberes legales y constitucionales, bajo los cuales se enmarcan cada uno de los procesos y procedimientos. Por lo tanto, solicitan su desvinculación.

El **BANCO DE BOGOTÁ** solicita ser desvinculado, toda vez que la acción no va dirigida en su contra ni se alega ninguna vulneración de su parte.

La entidad **BYPORT SOLUCIONES FINANCIERAS**, precisó que el accionante actualmente se encuentra activo-vigente con un crédito en la compañía bajo la modalidad de libranza a través de la pagaduría de la Policía Nacional. No se evidencia ninguna solicitud de certificado de saldo por pago total que haya sido realizada posterior al mes de junio de 2020. Aunado a ello, de la narración en el escrito de tutela, se demuestra que la compañía no tiene nada que ver con las vulneraciones que alega el actor.

El **JUZGADO SESENTA CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ**, informó que el proceso que se alude en la acción de tutela es el Ejecutivo 2020-0479 de Cooperativa Multiactiva Integral de Servicios contra Wilmer Ariza Cristancho, en el cual se libró mandamiento de pago y se decretaron unas medidas cautelares, además, el proceso se encuentra en el trámite de notificación al demandado.

**COOPMINDER Y JURIDICOS EL SOLAR S.A.S** no se pronunciaron frente al particular, pese a estar debidamente notificados. (archivo 07 y 09 E.D)

## **VII. PROBLEMA JURÍDICO**

Una vez desplegados los anteriores supuestos fácticos, le corresponde a este Despacho determinar, si el amparo constitucional propuesto resulta procesalmente viable para presentar solicitudes de índole pecuniario. Aunado a ello, determinar si efectivamente se vulneró el derecho fundamental constitucional de **PETICIÓN** al accionante por parte de la entidad accionada, al no brindarle respuesta al derecho de petición incoado o por el contrario se presentó una carencia actual de objeto por hecho superado.

## **VIII. CONSIDERACIONES**

### **COMPETENCIA**

Este Juzgado la tiene para tramitar y fallar la acción incoada, en virtud de lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991, en el cual se asigna su conocimiento a todos los Jueces de la República, sin determinar competencia territorial de manera exclusiva, salvo el lugar donde ocurre la vulneración del Derecho.

## LEGITIMACIÓN

**POR ACTIVA** la ostenta la accionante, al invocar la protección constitucional en virtud de lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto 2591.

**POR PASIVA** radica en cabeza de la entidad accionada de la cual se predica la vulneración de derechos confutados.

## ANÁLISIS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA.

### INMEDIATEZ

Por la Corte Constitucional se ha reiterado que uno de los principios que rigen la procedencia de la acción de tutela es la inmediatez. De tal suerte que, si bien la solicitud de amparo puede formularse en cualquier tiempo, es decir, no tiene término de caducidad, su interposición debe hacerse dentro un plazo razonable, oportuno y justo, debido a que su finalidad es la protección inmediata y urgente de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados.

No obstante, existen eventos en los que *prima facie* puede considerarse que la acción de tutela carece de inmediatez y en consecuencia es improcedente, pues ha transcurrido demasiado tiempo entre la vulneración de los derechos fundamentales y la presentación de la solicitud de amparo.

En estos casos en los que ha pasado un tiempo considerable, el análisis de procedibilidad de la petición de protección constitucional se torna más estricto y está condicionado a la verificación de lo siguiente:

- i) *la existencia de razones válidas y justificadas de la inactividad procesal, como podrían ser la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor para formular la solicitud de amparo en un término razonable y la ocurrencia de un hecho nuevo, entre otros;*
- ii) *la vulneración de los derechos fundamentales continúa y es actual; y,*
- iii) *la carga de la interposición de la solicitud de amparo en un determinado plazo resulta, de una parte, desproporcionada debido a la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante, y de otra, contraria a la obligación de trato preferente conforme al artículo 13 Superior.<sup>1</sup>*

Frente a situaciones como la que se estudia, de personas que alegan una estabilidad laboral reforzada debido a su condición de debilidad manifiesta, con ocasión de su estado de salud la Corte Constitucional ha flexibilizado el análisis del requisito de inmediatez cuando:

- (i) *Existe una afectación a la salud del demandante que permanece en el tiempo y la cual le ha impuesto una carga adicional que le impide actuar de la misma forma que alguien sano;*
- (ii) *Se trata de sujetos de especial protección, como por ejemplo las personas en situación de discapacidad y;*
- (iii) *En aquellas situaciones en las que si bien el actor no acudió a los medios jurisdiccionales que tenía a su alcance, sí desplegó cierta actividad ante su empleador para proteger sus derechos.<sup>2</sup>*

Acorde con la jurisprudencia expuesta en precedencia, se colige que el requisito de inmediatez impone una carga al demandante consistente en presentar la acción de tutela en un término razonable, ello a fin de propender hacia una protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados. Sin embargo, de interponerse una solicitud de amparo transcurrido un término de tiempo considerable, debe el juez constitucional analizar

---

<sup>1</sup> Sentencia T 014 de 2019.

<sup>2</sup> Sentencia T 151 de 2017.

y determinar si las justificaciones aportadas para superar tal requisito de procedibilidad, constituyen un motivo suficiente que permita validar la inactividad del sujeto afectado.

En el caso bajo estudio, este Despacho revisa el escrito tutelar y los documentos que aporta como pruebas la parte activa y analiza que si se cumple con el principio de inmediatez constitucional, pues el hecho generador del pleito ocurrió entre los meses de enero y marzo de 2021 y la acción de tutela fue interpuesta el 27 de abril del mismo año, lo que a todas luces supera este requisito de procedibilidad.

Superada la inmediatez, en orden lógico de procedencia, pasa a estudiar este Juzgado la **SUBSIDIARIEDAD** de la acción así:

La acción de tutela está prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un mecanismo procesal específico y directo que tiene por objeto la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, en una situación jurídica determinada cuando éstos sean vulnerados o se presente amenaza de su violación.

A su vez, la Carta Magna en armonía con el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, definen la acción de tutela como un mecanismo judicial, para la protección inmediata de los derechos fundamentales, de carácter **subsidiario**, es decir, que procede siempre que en el ordenamiento jurídico no exista otra acción idónea y eficaz para la protección efectiva de estos derechos. Las normas en comento disponen:

*“Artículo 86 Constitución Nacional:*

**(...) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. (...)**

*Artículo 6º Decreto 2591 de 1991*

*CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá:*

**1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.** La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (...) (Negritas y subrayas fuera del texto).

Así las cosas, este amparo constitucional solo está llamado a proceder cuando el recurrente no disponga de otro mecanismo de defensa judicial para brindar una protección efectiva, pues se entiende que –por regla general– todos los jueces de la República están investidos de autoridad para asegurar la salvaguarda de los *iusfundamentales* de las personas que acuden a su jurisdicción, no siempre el juez de tutela es el primer llamado a proteger los derechos constitucionales, toda vez que su competencia es subsidiaria y residual.

Este mandato ha sido identificado por la jurisprudencia como el *principio de subsidiaridad*, cuyo propósito es el de preservar el reparto de competencias atribuido por la Constitución y la ley a las diferentes autoridades judiciales, en desarrollo de los principios de autonomía e independencia de la actividad judicial.<sup>3</sup>

Según esta exigencia, al existir otros mecanismos de custodia judicial, se debe recurrir a ellos, no hacerlo, convertiría esta acción tuitiva en un recurso expedito para vaciar la competencia ordinaria de los jueces y tribunales, resolviendo conflictos legales, es así, que

---

<sup>3</sup> Sentencia T 347 de 2016.

al desconocerse el carácter subsidiario de la acción de tutela se distorsionaría la índole que le asignó el constituyente y se deslegitimaría la función del juez de amparo.

Empero dicha regla no es absoluta, pues en los casos en que existan medios judiciales de protección ordinarios al alcance del actor, la acción de tutela será procedente si el juez constitucional logra determinar que la acción de tutela a pesar de la existencia de otros medios de defensa judicial, ésta se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y cuando los otros mecanismos de defensa no sean eficaces para brindar un amparo de forma integral, dadas las circunstancias especiales del caso y la situación en la que se encuentra el solicitante.

En ese orden, los pronunciamientos constitucionales han indicado que el perjuicio debe ser *inminente, urgente, grave e impostergable*, entendiendo cada uno de estos conceptos como una amenaza o que esté por suceder prontamente, lo que equivale a una gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona; la urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea *impostergable*, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.

En el presente asunto, el accionante instauró la acción constitucional, con el fin de que se ordene a JURIDICOS EL SOLAR S.A.S realizar ajustes en sus descuentos de nómina y le sean suspendidos las deducciones por el embargo decretado por el Juzgado Sesenta Civil Municipal de Bogotá, debido a que todo obedeció a un error de digitación y no fue notificado debidamente de la mora en el pago de sus cuotas. Además solicita la entrega de unos documentos pedidos mediante derecho de petición.

Sobre el particular, el Juzgado Sesenta Civil Municipal de Bogotá informó que el proceso que se alude en la acción de tutela es el Ejecutivo 2020-0479 de Cooperativa Multiactiva Integral de Servicios contra Wilmer Ariza Cristancho, en el cual se libró mandamiento de pago y se decretaron unas medidas cautelares, además, el proceso se encuentra en el trámite de notificación al demandado.

JURÍDICOS EL SOLAR S.A.S no contestó la acción de tutela.

Frente a las pretensiones primera, segunda, tercera y cuarta es evidente, que la controversia aquí planteada nace de un proceso ejecutivo por incumplimiento de una obligación financiera por parte del accionante, a través del cual se decretó el embargo de un porcentaje de su salario.

Al respecto, este juzgado no es el competente para dirimir las discusiones planteadas por el accionante las cuales se derivan de obligaciones financieras y mora en sus pagos, de cuestiones pecuniarias y de índole económico que no pueden ventilarse por este mecanismo preferente y sumario, mucho menos cuando no se alega ni se demuestra si quiera sumariamente la afectación al mínimo vital del actor. No se puede a través de esta acción, usurpar funciones propias de un juez natural o de trámites que están propiamente regulados en la normatividad.

Es claro que el actor cuenta con los medios de defensa propios del proceso ejecutivo, que en este caso se adelanta ante el Juzgado Sesenta Civil Municipal de Bogotá, a través del cual puede plantear las situaciones fácticas y jurídicas a las que considere que haya lugar

en defensa de sus prerrogativas, aunado a que, ante el mismo Juez puede solicitar el levantamiento, la suspensión y/o la reducción del embargo que se encuentra gravado sobre su salario y mediante los medios exceptivos poner en conocimiento las vulneraciones de parte de la accionada y oponerse a las pretensiones que plantearon, recordándose que todos los jueces de la república están llamados a garantizar los derechos fundamentales de los sujetos procesales.

Téngase en cuenta, que para desatar controversias de tipo contractual, la Corte Constitucional se ha pronunciado en numerosas oportunidades en torno a la improcedencia de la acción de tutela para debatir asuntos esa naturaleza, considerando que, el amparo por vía de tutela es excepcional, por tratarse de discusiones que se derivan de acuerdos privados celebrados por las partes, que, en principio, deberían ser resueltos mediante acciones ordinarias de carácter civil, comercial o contencioso dependiendo del caso particular.

Tal postura puede remontarse a la sentencia T-594 de 1992. En esa oportunidad sostuvo la Corte Constitucional que *“las diferencias surgidas entre las partes con ocasión o por causa de un contrato no constituyen materia que pueda someterse al estudio y decisión del juez por vía de tutela ya que, por definición, ella está excluida en tales casos, toda vez que quien se considere vulnerado o amenazado en sus derechos goza de otro medio judicial para su defensa: el aplicable al contrato respectivo según su naturaleza y de conformidad con las reglas de competencia establecidas por la ley”*.

En suma, en virtud del principio de subsidiariedad, la acción de tutela es improcedente para decidir las controversias suscitadas alrededor del reconocimiento de derechos de carácter económico y litigioso, tal como el que solicita el actor, menos cuando ya se encuentra en trámite un proceso ejecutivo en el que puede ejercer su derecho de defensa y además pedir al juez de la causa la protección de sus prerrogativas fundamentales. Concluyéndose entonces que la presente acción no supera el requisito esencial de ser subsidiaria. Razón por la cual se declarará su improcedencia frente a esas pretensiones.

Por otro lado, de las pruebas, los hechos y la pretensión quinta de la acción de tutela, se evidencia que el accionante envió derecho de petición a la entidad JURIDICOS EL SOLAR S.A.S el pasado 12 de marzo de 2021, del cual no ha recibido respuesta.

Sobre esta prerrogativa fundamental se tiene que:

## **DEL DERECHO DE PETICIÓN**

Según el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución, para lo cual el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al reglamentar dicho ejercicio consagra en su artículo 14 el término para resolver así: Salvo norma legal especial toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días y aquellas mediante las cuales se eleva una consulta deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes. Cuando no fuere posible resolver o contestar en dicho plazo, se deberá informar así al interesado, antes del vencimiento señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

Frente a las características esenciales del derecho de petición, la Corte Constitucional considera que el núcleo esencial de esta prerrogativa reside en la resolución pronta y

oportuna de la cuestión, sin que necesariamente deba acceder positivamente a sus requerimientos. En ese sentido ha manifestado:

*“(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible<sup>4</sup>; (v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares<sup>5</sup>; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición<sup>6</sup> pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa<sup>7</sup>; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder;<sup>8</sup> y (x) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado”.<sup>9</sup>*

De otro lado ha dicho la jurisprudencia<sup>10</sup> que la respuesta puede o no satisfacer los intereses de quien ha elevado la petición, en el sentido de acceder o no a sus pretensiones, pero siempre debe ser una contestación que permita al peticionario conocer, frente al asunto planteado, cuál es la situación y disposición o criterio en el ente respectivo. En ese sentido afirma que se satisface ese derecho cuando se emiten y reciben respuestas que abarcan en forma sustancial y resuelven, en lo procedente, la materia objeto de solicitud, independientemente del sentido dado.

También ha reiterado la Alta Corporación<sup>11</sup> que el derecho de petición exige concretarse en una pronta y oportuna respuesta por parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud, sin importar que la misma sea favorable a los intereses del peticionario y escrita, pero en todo caso debe *“cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.”* (La sub línea es del despacho).

En suma, le corresponde al juez constitucional revisar si los lineamientos dispuestos por la ley para considerar que efectivamente se ha dado una apropiada respuesta, se han respetado adecuadamente o no. En caso contrario, se estaría ante una clara vulneración del derecho fundamental de petición, momento en el cual el juez de tutela podrá ordenar a la respectiva autoridad producir o darle a conocer debidamente al solicitante, la contestación que resuelva de manera efectiva lo requerido.

En el sub lite, el actor negó indefinidamente no haber recibido respuesta a la petición enviada a la accionada el pasado 12 de marzo de 2021, por lo tanto correspondía a JURIDICOS EL SOLAR S.A.S, desvirtuar tal negación demostrando que si había brindado la información solicitada por el accionante, sin embargo, la demandada guardó absoluto silencio frente al particular.

Por lo anterior, atendiendo que a la solicitud radicada por el accionante el 12 de marzo de 2021, ante JURIDICOS EL SOLAR S.A.S no se le ha brindado respuesta, habiéndose agotado ya los términos para emitirla, es procedente tutelar su derecho fundamental, ordenando a la citada entidad que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes

<sup>4</sup> Sentencia T-481 de 1992, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein.

<sup>5</sup> Al respecto véase la sentencia T-695 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

<sup>6</sup> Sentencia T-1104 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda.

<sup>7</sup> Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.

<sup>8</sup> Sentencia 219 de 2001, M.P. Fabio Morón Díaz.

<sup>9</sup> Sentencia 249 de 2001, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

<sup>10</sup> Sentencia T-183 de 2013, M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla

<sup>11</sup> Sentencia T-146-2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.



a la notificación del presente fallo brinde una respuesta completa, de fondo, de forma clara, precisa, de manera conveniente, coherente y lógica con lo solicitado, por el señor **WILMER ARIZA CRISTANCHO**, debiendo además ser puesta en conocimiento del mismo.

Finalmente, como la responsabilidad de brindar respuesta a la petición corresponde únicamente a Jurídicos EL SOLAR S.A.S, se desvinculará a **BANCO DE BOGOTÁ, BAYPORT, COOPMINDER Y POLICÍA NACIONAL** y al **JUZGADO SESENTA CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ**.

Por lo dicho, el Juzgado Sexto Civil Municipal de Manizales, Caldas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley:

### **RESUELVE**

**PRIMERO: CONCEDER** la tutela del derecho fundamental de petición del señor **WILMER ARIZA CRISTANCHO** en contra de **JURIDICOS EL SOLAR S.A.S**.

**SEGUNDO: ORDENAR** a la **JURÍDICOS EL SOLAR S.A.S** que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo brinde una respuesta completa, de fondo, de forma clara, precisa, de manera conveniente, coherente y lógica con lo solicitado, por el señor **WILMER ARIZA CRISTANCHO**, debiendo además ser puesta en conocimiento del mismo.

**TERCERO: NEGAR POR IMPROCEDENTE** las pretensiones primera, segunda, tercera y cuarta.

**CUARTO: DESVINCULAR** a **BANCO DE BOGOTÁ, BAYPORT, COOPMINDER Y POLICÍA NACIONAL** y al **JUZGADO SESENTA CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ**.

**QUINTO: ADVERTIR** a la accionada **JURÍDICOS EL SOL S.A.S**, que el incumplimiento de lo aquí dispuesto los hará acreedores a las sanciones dispuestas en los artículos 52 y 53 del Decreto 2591.

**SEXTO: NOTIFICAR** esta providencia por el medio más expedito a las partes, informándoles en tal acto que pueden impugnar esta decisión dentro de los tres días siguientes a su notificación.

**SÉPTIMO:** De no ser impugnada esta sentencia, se ordena remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**VALENTINA SANZ MEJÍA**  
**JUEZ**

**Firmado Por:**

**VALENTINA SANZ MEJIA**

**JUEZ**

**JUEZ - JUZGADO 006 MUNICIPAL CIVIL DE LA CIUDAD DE MANIZALES-CALDAS**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c192c7ce061e838ec83412603d26d7b26b4f268f15a75d237947fef92116e386**

Documento generado en 10/05/2021 04:23:30 PM